



Movimientos anti-mineros: el caso de Pascua-Lama en Chile¹

Leire Urkidi Azkarraga

Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental, Universidad Autónoma de Barcelona, España²

LeireUrkidiAzk@hotmail.com

Fecha de recepción: 24/04/2008. Fecha de aceptación: 16/06/2008

Resumen

En los últimos años, el aumento de proyectos de minería aurífera en América Latina ha dado lugar a toda una serie de protestas comunitarias englobadas en la consigna del "NO a la minería de oro". El conflicto de Pascua-Lama, en el chileno Valle del Huasco, fue estudiado durante cuatro meses de trabajo de campo dentro de la metodología de Investigación-Acción. A partir de aquí, se analizaron los intereses y valores defendidos por los actores involucrados en el conflicto así como sus respectivas fuerzas de poder (análisis CLIP). A través de una reconstrucción cronológica del mismo, se observó cómo el cambio de posicionamiento de los grandes agricultores locales supuso un antes y un después en el esquema de poderes. A nivel estratégico, las consultas populares de Tambogrande (Perú), Esquel (Argentina) o Sipacapa (Guatemala), entre otras, no fueron imitadas por el movimiento anti-Pascua-Lama. Aquí, se optó por la búsqueda de alianzas nacionales e internacionales para oponerse al proyecto de la transnacional Barrick Gold. Estas alianzas propiciaron un mayor acceso a los medios de comunicación que, junto con los conocimientos adquiridos por la práctica activista, supusieron un aumento del poder (un "empoderamiento") de la comunidad local.

Palabras clave: minería de oro, ecología política, investigación-acción participativa, internacionalismo ecologista, "empoderamiento" comunitario.

Abstract

In recent years, the increase in gold mining projects in Latin America has given rise to a set of communitarian protests under the slogan of "No mining". Pascua-Lama conflict, in the Chilean Valley of Huasco, was studied during a four month period of field-work within the Action-Research methodology. An analysis of the interests and values defended by the actors involved in the conflict was carried out as well as of their power forces (CLIP analysis). Through conflict chronological reconstruction, it was observed that the position change of local big farmers marked a before and after in the power scheme. Strategically, the popular referendums of Tambogrande (Peru), Esquel (Argentina) or Sipacapa (Guatemala), among others, were not imitated by anti-Pascua-Lama movement. Instead, national and international alliances were made in order to oppose Barrick Gold transnational's project. These alliances favoured a greater media access, which, together with the knowledge obtained through activism, lead to local community empowerment.

Key words: gold mining, political ecology, participatory action-research, environmental internationalism, community empowerment.

¹ Esta investigación se ha realizado bajo el régimen de Becas de Formación de Personal Investigador (2006-2007 y 2007-2008) del Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco

² Dirección Postal de contacto: Pintor Díaz Olano, 18, 2ºD, 01008, Vitoria-Gasteiz, España



1. Introducción

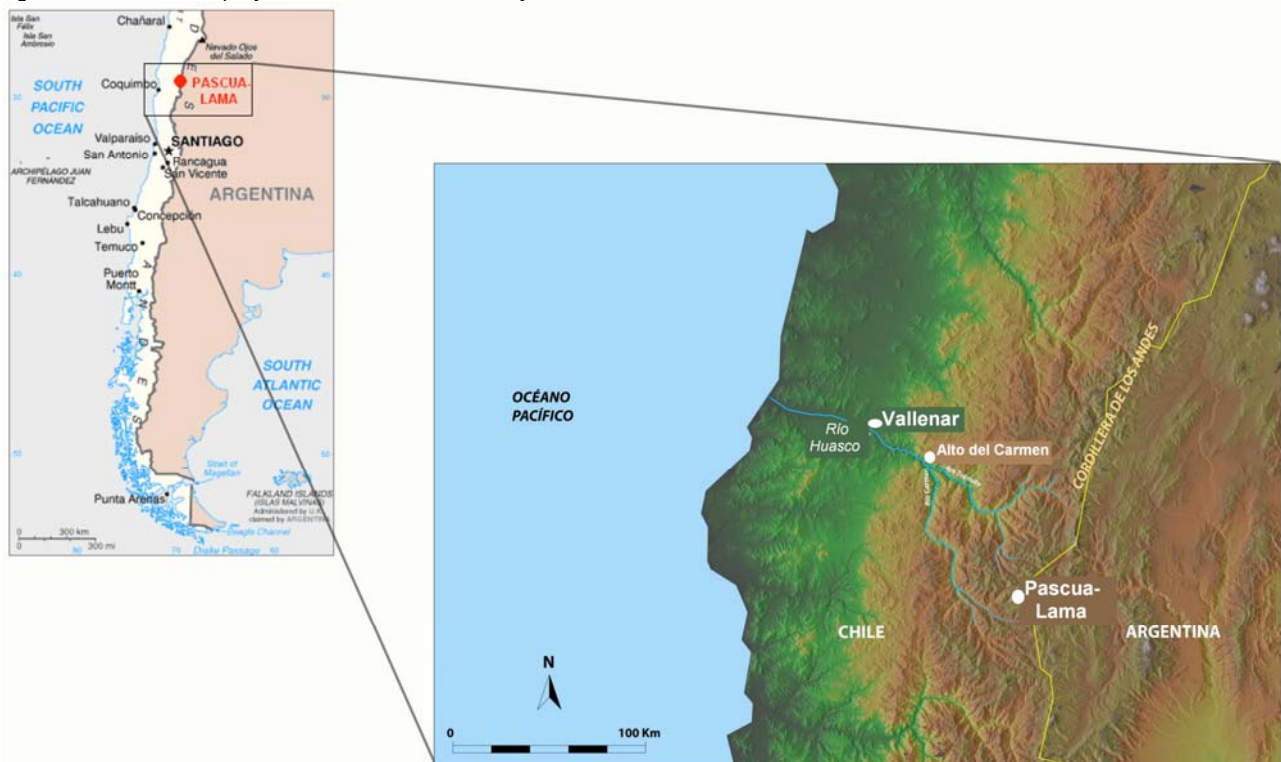
El caso de Pascua-Lama (P-L) es un ejemplo paradigmático de estrategia internacionalista dentro de los movimientos anti-mineros. Las nuevas tecnologías y la creciente sensibilidad ambiental global han amplificado sustancialmente las voces del Valle del Huasco, el afectado por P-L en la vertiente chilena. Sin embargo, el proyecto no ha sido paralizado. La minera canadiense Barrick Gold Corporation mantiene su interés en una obra que lleva más de ocho años posponiéndose.

Situado en la frontera entre Chile y Argentina, en la cordillera andina, el proyecto se presenta como la segunda mayor mina de oro de América del Sur. “A cielo abierto” y “lixiviación con cianuro” son los controvertidos conceptos que describen la tecnología que utilizará. Más controvertidos aún por las características físicas del lugar donde se proyecta: a más de 4500 metros de altura, en la cabecera de unas cuencas muy cercanas al desierto más seco del mundo y bajo tres

glaciares de montaña. Las críticas locales a P-L provienen de la dependencia hídrica de una población básicamente agrícola y de los deseos de conservar un contexto socio-cultural propio. Esta investigación se centra en el valle chileno afectada por P-L (el Valle del Huasco) y, en concreto, en la comuna rural más cercana al proyecto (la de Alto del Carmen) (véase Figura 1).

La minería de metales está proliferando de manera importante en Latinoamérica generando un incremento de las protestas comunitarias hacia los proyectos extractivos. Ver cómo sus aguas serán contaminadas y cómo pelagra la subsistencia familiar ha hecho que muchos pueblos se opongan tajantemente a las minas. En el caso concreto del oro, varias son las ocasiones en las que estas comunidades han resultado exitosas. Tambogrande (Perú) y Esquel (Patagonia Argentina) suponen el ejemplo de que algunos de estos proyectos se pueden parar mediante la lucha popular.

Figura 1. Ubicación del proyecto minero Pascua-Lama y detalle de la zona de estudio en el Valle del Huasco.



Fuente: Elaboración propia



A nivel estratégico y a pesar de los problemas para su legitimización, las consultas populares o los referéndums locales (ya sea bajo el Convenio 169 de la OIT o sin acudir a él) se están consolidando como una nueva institución. Las consultas fallidas de numerosos departamentos argentinos, los referéndums de Sipacapa y Huehuetenango en Guatemala, las consultas de Ayabaca, Huancabamba y Carmen de la Frontera en Perú o los comentados triunfos de Tambogrande y Esquel, son casos de los últimos seis años.

La oposición en la comunidad estudiada en esta investigación, sin embargo, no optó por este camino sino por la búsqueda de alianzas nacionales e internacionales para boicotear el proyecto. Decidió aprovechar la revalorización de las luchas locales que se está produciendo a nivel global. Si bien no se ha conseguido impedir la mina, las reivindicaciones no se deberían considerar un fracaso. Por un lado, los conflictos ambientales de este tipo animan a la reflexión sobre qué modelo de desarrollo local busca la comunidad y cuáles son sus implicaciones socio-ecológicas. Profundizar en estas reflexiones es por sí mismo un logro. Por otro lado, el activismo genera un empoderamiento de la oposición local y por tanto de la comunidad. Este mayor poder proviene de dos fuentes principalmente: un incremento de los conocimientos y un aumento en el acceso a los medios nacionales e internacionales de comunicación.

De hecho, para comprender y caracterizar este tipo de conflictos es relevante conocer cuál es su esquema de poderes e intereses así como su evolución en el tiempo. En este artículo, veremos si el conflicto P-L es un caso de "ecologismo de los pobres" (Guha & Martínez-Alier 1997) donde comunidades de subsistencia protegen su medio ambiente por una dependencia directa hacia él. O si se trata de un conflicto de intereses (Folchi 2001), entendido como una lucha entre actividades productivas incompatibles. O si encaja mejor en la teoría de la difusión internacional del ambientalismo ("broadening base") de Dunlap (2008) que viene a decir que el ambientalismo penetra en muy

diferentes sectores socioeconómicos dado el intenso carácter de la degradación ambiental. O veremos si responde a alguna otra interpretación de conflictos como la de los chilenos Sabatini & Sepúlveda (1997) que después se comentará.

El artículo se estructura en cuatro partes. Primero, se comentan los objetivos y la metodología de la investigación. Después, se realiza una introducción contextual al caso de Pascua-Lama. A continuación, se explica brevemente el proyecto y la cronología del conflicto para acabar con la parte de análisis y discusión.

2. Análisis de conflictos ambientales

2.1. Objetivos

Desde la economía ecológica y la ecología política, sin desprestigiar las aportaciones de la sociología, se insiste que los crecientes conflictos ambientales tienen un carácter estructural y surgen del creciente metabolismo de la sociedad (Martínez-Alier 2002). Un conflicto ambiental se define como una situación manifiesta en la que existe una valoración contrapuesta por parte de diferentes actores sociales con respecto a una cuestión que afecta al medio ambiente (por ejemplo, un proyecto minero, una plantación forestal o una política energética). Los actores sociales tienen a su vez diferentes capacidades de intervenir en esa cuestión o decisión ambiental.

Más allá de la búsqueda de resoluciones, el análisis de conflictos es relevante para entender la sociedad y su evolución. El conflicto visibiliza las divergencias de perspectivas e intereses y las relaciones de poder. Su análisis puede contribuir a la visibilización del conflicto, incidiendo así en la transformación social.

Por todo ello, el primero de los objetivos del presente artículo es la caracterización del conflicto ambiental de Pascua-Lama. ¿Cuál es su esquema con respecto a las fuerzas de poder de los actores y actrices? ¿Cuál con respecto a los intereses y valores defendidos?



Se pretende analizar la distribución del poder entre los que apoyan o se oponen a P-L. El poder entendido como la capacidad de influenciar a otros y de utilizar los recursos con los que se cuenta para lograr los objetivos. Estos recursos serían la autoridad política, los recursos económicos, la capacidad de usar la fuerza o de amenazar con ella, el acceso a la información y los medios para comunicarse. Se intenta mostrar, además, la evolución temporal de la asimetría de poder a lo largo del conflicto.

Esto nos lleva a estudiar cómo se van construyendo las motivaciones de actores y actrices durante el conflicto. Veremos, por ejemplo, cuáles son las ideas que animan a la oposición a la mina: una defensa post-materialista de la naturaleza y de los glaciares, un apego a la naturaleza como medio de subsistencia, una visión indígena conservacionista o la defensa de la agricultura de exportación.

El segundo objetivo de la investigación sería analizar la estrategia adoptada por el movimiento anti-Pascua-Lama. Atendiendo al concepto de "glocalización" alternativa (Escobar 2000), se destaca y estudia la proliferación de las redes nacionales e internacionales en el apoyo a determinadas luchas locales.

2.2. Metodología cualitativa y participativa

El proceso de investigación se enfocó desde disciplinas como la sociología cualitativa, la etnografía o la Investigación-Acción. Durante los cuatro meses de trabajo de campo en el valle, se realizaron entrevistas³ en profundidad con actores locales clave y se asistió a numerosas actividades comunitarias. La elección de los entrevistados respondió a dos criterios: por un lado, la generación de teorías siguiendo una guía inductiva en la que las hipótesis van emergiendo de la propia

investigación, y, por otro, el estudio de la mayor diversidad de perspectivas posibles. Sin embargo, el conocimiento del lugar y de la problemática no se limitó a momentos puntuales como entrevistas o reuniones. Durante la estancia, se convivió con varios de los actores sociales, observando y participando de la cotidianidad local, ahondando en los detalles de su sociedad y de su conflicto. Estas prácticas corresponden con los métodos etnográficos de investigación.

Dentro de la propuesta de la Investigación Acción, la implicación con el movimiento de protesta fue más allá de una observación pasiva. Se colaboró activamente con esta oposición, participando en sus acciones de protesta⁴. Además, con intención de crear un debate reflexivo con la comunidad, y no sólo con los actores movilizados, se organizaron debates, proyecciones de documentales y visitas casa a casa. En este caso, una de las herramientas políticas en las que se confía para la actuación en los conflictos ambientales pasa por los movimientos sociales y por la creación de espacios comunitarios de debate.

A nivel bibliográfico se realizó, una aproximación a la realidad minera de Chile, e igualmente, al contexto mundial de la extracción y demanda de oro. También se revisó la literatura sobre movimientos anti-mineros en Latinoamérica. Y, atendiendo al caso concreto, se estudiaron las características del proyecto extractivo así como de los contextos social y ecológico del Valle del Huasco.

Se recopiló documentación de la administración, legal y periodística, a partir de fuentes primarias y secundarias, así como informes de Barrick y de la oposición. El estudio se completó visitando otras comunidades en conflictos ambientales de la

³ Se entrevistaron agricultores, empresarios y políticos del Valle del Huasco, algunos apoyaban el proyecto, otros estaban en la oposición (21 entrevistas). No fue posible entrevistar a ningún directivo de Barrick ya que remiten a investigadores y periodistas a su área de comunicación. También se realizaron entrevistas en la zona afectada por P-L en Argentina, pero estas no se analizaron para esta investigación

⁴ La pérdida de neutralidad científica que implica este posicionamiento se puede contrarrestar apelando a la transparencia del proceso y a la ética de la investigadora (esclareciendo por ejemplo desde qué posición se escribe). También se podría largamente discutir sobre la supuesta neutralidad científica. Sin embargo, estos no son los objetivos del artículo (ver para ello por ejemplo Gabarrón & Hernández, 1994)



región y contactando con grupos anti-Pascua-Lama de otras ciudades.

A partir de la totalidad de herramientas utilizadas en el trabajo de campo, se llevó a cabo un análisis del conflicto, estructurado en:

1. Reconstrucción cronológica de los sucesos más relevantes del conflicto.

2. Identificación de los actores clave en cada etapa y su posición frente a la problemática minera en cada una de ellas.

3. Análisis CLIP (Chevalier 2006) del conflicto. Este se basa en la valoración cualitativa del poder, la legitimidad y los intereses⁵ de los actores sociales participantes en una situación así como de las relaciones entre ellos (de colaboración o conflicto). A partir de esta valoración, que se puede realizar de manera participativa con los propios actores, se clasifican en categorías tales como actor dominante, influyente, vulnerable. Después se colocan los actores en una tabla atendiendo a esas categorías y a las relaciones existentes entre ellos.

4. Estudio de las visiones y valores clave de los diferentes actores a partir del concepto de construcción de marcos interpretativos. "Los procesos enmarcadores o marcos interpretativos son esfuerzos estratégicos conscientes realizados por grupos de personas que simplifican y condensan el "mundo exterior" al señalar y codificar selectivamente los objetos, situaciones, acontecimientos, experiencias y las acciones que se han producido en el entorno presente o pasado de cada individuo" (McAdam et al. 1999).

⁵ Legitimidad entendida como el reconocimiento (por ley o costumbres locales), por parte de otros actores, de los derechos y responsabilidades de un determinado actor al igual que su acierto ejerciéndolos. Los intereses pueden ser entendidos como las ganancias y pérdidas netas del actor en caso de, por ejemplo, realizarse la mina pero en este caso se ha interpretado como las posiciones manifiestas ante el proyecto (apoyo incondicional, apoyo débil, no posición manifiesta, oposición débil u oposición radical). El poder tal y como ha sido definido en la parte 2.1. del artículo

Los resultados de estos análisis son presentados de manera integrada en la quinta parte de este artículo.

3. Contextos

3.1. El Chile minero

Chile es un país declaradamente minero y, a pesar de la creciente exploración en oro, esto se debe principalmente a la extracción cuprífera. El boom minero del país de la década de los 90 dio lugar a que en el año 1995 sus exportaciones de cobre fueran el 30,1% del total mundial, mientras que en el 2004 este valor se elevara hasta el 47,5%.

La promoción minera de América Latina ha aumentado durante las últimas décadas gracias a una intensa reforma normativa que rentabiliza la inversión en el sector. Si bien tras muchas de estas reformas ha estado el Banco Mundial, en el caso de Chile esto no ha sido necesario. La voluntad de los gobernantes de generar un desarrollo dependiente de la inversión extranjera⁶ y de reforzar la identidad minera ha bastado para la creación de esa legislación. Según los estudios del Fraser Institute (2003), Chile ocupaba el tercer puesto mundial en el índice de políticas de incentivo a la inversión minera y el primero para el potencial minero.

Entre las leyes que animan a la inversión extranjera, tenemos el Código de Minería de 1982 que introduce el concepto de concesiones plenas para las mineras; el Estatuto del Inversionista Extranjero de 1974 que permite a las empresas el mecanismo de depreciación acelerada de sus inversiones y someterse a invariabilidad tributaria; o las leyes 18.985 y 19.137 de los 90 que introducen nuevas ventajas fiscales para la gran minería.

Esta legislación común a la mayor parte de Latinoamérica se agrava en Chile por la

⁶ Se ha de resaltar que tras la nacionalización de la minería en 1971 llevada a cabo por el gobierno de Allende, la dictadura pinochetista inició el proceso de atracción de la industria transnacional. Sin embargo, la mayor parte de la inversión minera extranjera se desarrolló durante la democracia concertacionista



inexistencia de regalías⁷. Las empresas privadas pagan, además de las patentes por las concesiones, impuestos sólo en función de sus ganancias finales. A pesar de la Ley de Evasión y Elusión Tributaria de 2001, muchas de estas empresas declaran pérdidas de muy diferentes maneras, eludiendo así el pago de esos impuestos. A todo esto habría que sumarle los beneficios de la típicamente laxa legislación ambiental latinoamericana, así como su escasa implementación real.

Como medida muy relevante para la realización de P-L, en 1997 se firma el Tratado sobre Integración y Complementación Minera entre Chile y Argentina. Éste posibilita no sólo la inversión extranjera en área fronteriza sino también la actividad minera en esta zona estratégicamente tan vigilada. De hecho, según la investigación de Luna Quevedo et al. (2004), el tratado fue redactado directamente por el lobby transnacional minero. A partir del tratado, ambos países ceden cierta soberanía creando un área donde parte de las legislaciones nacionales no son aplicables.

Todo esto supone un aumento de la exploración y extracción minera que a su vez se ve acompañado de una activación de los movimientos anti-mineros de diversa índole. Esto sucede porque los grandes volúmenes de exportación cuprífera se traducen, en el ámbito ambiental, en altos niveles de contaminación de las zonas mineras (Chuquicamata como el gran ejemplo chileno) y en presión sobre los escasos recursos hídricos. A nivel social, diversos estudios muestran que las zonas mineras tienen comparativamente mayores niveles de inequidad, menores inversiones en educación, mayor prevalencia de problemas como el SIDA, el alcoholismo, la prostitución o el trabajo infantil, acentuando así la pobreza y la conflictividad social (Pegg 2006). Atendiendo al factor económico, un estudio del propio Banco Mundial (Weber-Fahr 2002), muestra que existe una correlación negativa

⁷ Las regalías o royalties serían unos pagos que debe realizar la empresa al país como indemnización por la extracción de un recurso no renovable. Son en función de la producción o de las ventas pero no de la ganancia final declarada por la empresa

entre relevancia de la minería en la economía nacional y crecimiento del PIB. Además, el carácter capital-intensivo de estos proyectos impide que se constituyan como una fuente de trabajo para los más empobrecidos (Ross 2001, en Pegg 2006). De hecho, en 2005, del total de la fuerza de trabajo de Chile, sólo un 0,84% se empleó en minería. Este contexto chileno y global es de suma importancia para la evolución de un conflicto minero como el de P-L.

3.2. El Valle del Huasco

El del Huasco es un valle transversal a la cordillera de los Andes, con dirección sureste-noroeste. Un aspecto relevante de su morfología, además del gran encajonamiento de los ríos, es el desnivel propio de zonas precordilleranas: en sólo 80 km pasamos de los 674 m del pueblo de Alto del Carmen a los 5400 m de la parte más alta del yacimiento Pascua-Lama.

Figura 2. Paisaje del Huasco, diciembre del 2006



Fuente: Urkidi 2006

La zona se encuentra en la interfase entre las regiones climáticas semiárida del Norte Chico e hiper-árida del desierto de Atacama: las precipitaciones son por tanto muy escasas. La escorrentía del Huasco responde a las nieves cordilleranas y al deshielo glaciar, siendo este la única fuente de agua en épocas de sequía. De hecho, en la zona más elevada de la comuna se encuentran varias masas glaciares. Esa escorrentía hace



posible el desarrollo agrícola de la zona así como la supervivencia de su flora y fauna.

En la provincia de Huasco viven alrededor de 66.500 personas, de las cuales unas 43.700 se concentran en la capital, Vallenar. La comuna de Alto del Carmen, la más elevada y netamente rural, está compuesta por 44 localidades y está habitada por cerca de 5.000 personas.

A pesar de lo encajonado de su forma, la comuna presenta un activo desarrollo en el área agrícola, impulsado por una próspera actividad frutícola, principalmente producción de uva pisquera y uva de mesa de exportación, además de cítricos, paltos y hortalizas. La producción de uva ocupa una importante fuerza laboral temporal, absorbiendo mano de obra local e incluso proveniente de otras comunas. Esta situación es relativamente reciente. El mayor desarrollo de la agricultura de exportación, la acumulación de tierras y la progresiva proletarianización del campesinado, comienza a mediados de los años 80, incrementándose con las mejoras en la tecnología de riego. Según las entrevistas realizadas, esta transición se realizó sin una adecuada diversificación productiva y ha provocado determinados problemas por el uso de pesticidas.

Sin embargo, en Alto del Carmen, aún se trabajan pequeños terrenos agrícolas destinados al autoconsumo y se mantiene una ganadería principalmente caprina. La comuna ofrece también una gran variedad de productos tradicionales elaborados por pequeños y medianos productores y proyecta el turismo rural como una alternativa factible para el futuro cercano.

Además del carácter rural y agrícola, un rasgo importante es la presencia de población indígena. En los territorios de Alto del Carmen, aunque también en otras comunas de la provincia, se establece la etnia Diaguita de los Huascoalinos⁸, reconocida desde

⁸ En 2006, la Comunidad Agrícola de los Huascoalinos, organización local que ostenta los títulos de propiedad de las tierras huascoalinas, estaba formada por 262 familias (alrededor de un 20% de la población de la comuna de Alto del Carmen). Sin embargo, muchas personas no pertenecientes a esta organización también se declaran indígenas diaguitas

agosto de 2006 por la Ley Indígena chilena. La etnia está llevando a cabo un proceso de auto-reconocimiento y reconstrucción cultural indígena pero lo cierto es que se han perdido muchos aspectos de la cultura diaguita, tales como la espiritualidad andina (la religión católica es bastante fuerte en el Valle) o la lengua (reducida a apellidos y toponimias). Sin embargo, se mantienen determinadas prácticas agrícolas y ganaderas tradicionales, así como la propiedad territorial comunal, una de las grandes reivindicaciones del grupo.

4. Pascua-Lama

4.1. El Proyecto

Pascua-Lama es un proyecto minero que consiste en la explotación a tajo abierto de un yacimiento de minerales de oro, plata y cobre, y su procesamiento para obtener como productos metal doré —oro y plata— y concentrado de cobre. Sin embargo, su principal interés económico se debe al oro. Se estima que el yacimiento cuenta con 17,4 millones de onzas de oro⁹.

La inversión en el proyecto, tras la última actualización de febrero de 2007, asciende a 2.300-2.400 millones de dólares. Las obras e instalaciones ocuparán una superficie total estimada en 1.650 hectáreas (16,5 km²), de las que aproximadamente 750 corresponden al territorio chileno. En esta zona, se desarrollará gran parte del rajo abierto. En la parte argentina, el procesado o beneficio mediante lixiviación con cianuro.

Un proyecto minero de estas dimensiones siempre supone unos impactos a sopesar, mitigar o discutir. Al respecto, dos han sido las ocasiones en las que se ha aprobado ambientalmente el proyecto Pascua-Lama. Primero en 2001, de manera más o menos discreta; después en el 2006, con una ampliación de la primera propuesta y algunas modificaciones. En resumen, las características que suponen los impactos más relevantes serían:

⁹ Asumiendo un precio de 850 US\$ -junio de 2008- sólo por el oro la ganancia bruta sería de unos 15.000 millones de US\$.



- Gran movimiento de tierras (riesgos geológicos, acidificación de las aguas, movilización de metales pesados, etc.).
- Utilización y transporte de grandes cantidades de cianuro de sodio y otros productos peligrosos.
- Crecimiento del tráfico rodado en el Valle.
- Alto consumo de agua y consumo eléctrico.
- Generación de empleo: 3000 trabajadores de promedio en la etapa de construcción, de los cuales 750 serían chilenos, y 1660 en la de operación, siendo chilenos 500 ó 600.
- Ubicación en zona de glaciares¹⁰.

4.2. El conflicto

En la Tabla 1 podemos observar el resumen cronológico del conflicto a partir de las dos grandes etapas identificadas. Como se explicará más adelante, la transición entre ambas se debe a un importante cambio en el esquema de poderes.

Tabla 1. Resumen de la cronología del conflicto

<i>Etapas</i>	<i>Inicio de las etapas</i>	
Antecedentes	1970	Comienzan las exploraciones del yacimiento
ETAPA 1	Agosto 2000	Barrick presenta el primer EIA (y se aprueba en mayo del 2001)
	Agosto 2004	Barrick presenta el segundo EIA
ETAPA 2	Junio 2005	La Directiva de la Junta de Vigilancia firma un acuerdo con Barrick
	Febrero 2006	Se aprueba el segundo EIA de Pascua-Lama (en diciembre en Argentina)

Fuente: Elaboración propia.

¹⁰ El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por la empresa muestra que el tajo abierto se realizaría bajo parte de estos glaciares (y en un primer momento propuso un traslado de los mismos). Una Comisión Investigadora de la Dirección General de Aguas de Chile ratificó en 2005 que los glaciares más cercanos a las obras de exploración y construcción de P-L habían disminuido en un 50-70% en los últimos 20 años, mientras que otros más alejados, no en más de un 15%.

1ª etapa

A pesar de que las operaciones de exploración en el Valle del Huasco llevaban muchos años realizándose, no es hasta el 2000 que Barrick Gold presenta el primer Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Pascua-Lama. Entonces, comienzan a surgir, en la comuna de Alto del Carmen y desde el mundo político, agrícola y religioso, las primeras voces críticas con el proyecto. Estos primeros focos opositores contactan con alguna ONG de Santiago que les comienza a asesorar sobre temas legales, ambientales y técnicos. Asimismo comienzan a conocer los casos de otras comunidades que viven problemas mineros. Estos hechos se identifican con el inicio del conflicto.

En estos primeros momentos del conflicto, la oposición se articula alrededor de agrupaciones religiosas locales. Los riesgos de disminución de caudal por la afectación de los glaciares, los riesgos de contaminación hídrica, la usurpación de terrenos comunales, el nulo respeto a las tradiciones huascoalinas, la incompatibilidad agricultura-minería y los perjuicios socio-económicos para todo el Valle son sus principales ejes reivindicativos.

A pesar de esta oposición, en abril de 2001, P-L recibe la aprobación ambiental por parte del gobierno chileno. Sin embargo, Barrick decide congelar el inicio de la construcción y comienza una intensa labor de intervencionismo social en el Valle: desde pequeños regalos y entrevistas casa a casa, hasta acuerdos con instituciones y pagos a numerosas personalidades políticas.

En agosto de 2004, Barrick presenta un nuevo EIA con una ampliación del primer proyecto de P-L. Este suceso impulsa la organización del movimiento opositor. Si hasta entonces solo se había recurrido a herramientas como el boca a boca, a partir de esta presentación, se forman grupos como la Coordinadora de Defensa de Alto del Carmen o el Consejo de Defensa de Vallenar y se incrementa el trabajo de difusión. La prensa regional y nacional comienza a hacerse eco del rechazo local al proyecto.



2ª etapa

En junio del 2005, durante el proceso de evaluación de este segundo EIA, la Directiva de la Junta de Vigilancia del Huasco, formada por los grandes agricultores del Valle y hasta entonces uno de los principales opositores al proyecto, firma un acuerdo con la minera. La Junta de Vigilancia es la institución que gestiona y administra los recursos hídricos de la cuenca del Huasco, dedicándose a temas de riego y de gestión del embalse de la zona. Su acuerdo significa un importante punto de inflexión en el conflicto. Por un lado, por la manera en que se firma, sin consultar a las bases de la Junta, y, por otro lado, porque implica que el poder económico local cambia de bando.

Quizás animadas por este hecho, ese mismo mes, 2500 personas se manifiestan en contra de P-L en Vallenar, algo histórico en el contexto local. Es la época, además, donde mayor número de cartas, declaraciones y denuncias se hacen desde los focos opositores provinciales. El tiempo, también, en que se empieza a organizar la oposición a escala nacional y en el que el conflicto comienza a resonar a nivel internacional. Esta expansión escalar se logra gracias a organizaciones y ONGs que actúan de puente entre el Valle y el mundo y gracias a la difusión a través de Internet.

Pero tras un año en el que, a pesar de las protestas, Barrick se introduce en casi todas las instituciones y crea una sutil pero intensa división comunitaria, en febrero de 2006, el gobierno chileno vuelve a aprobar ambientalmente P-L. La respuesta argentina llega en diciembre de ese año con el mismo resultado favorable. Estos eventos provocan un sentimiento de desesperanza entre la población que da lugar a una disminución de la intensidad opositora.

Aún así, el inicio del 2007 trae el surgimiento de nuevos opositores y estrategias que alteran y refuerzan el movimiento anti-minero. Nuevos opositores como algunos trabajadores de la comuna que habían sido despedidos por Barrick a causa de su sindicalización. Nuevas estrategias como el corte de camino de febrero del 2007, la

demanda por Daño Ambiental presentada ese mismo mes o la campaña internacional contra Barrick iniciada en mayo del 2007.

De hecho, a pesar de todas las aprobaciones, Barrick ha asegurado que ni siquiera el 2008 será el año del inicio de la construcción. En marzo de 2007, la empresa anunció un aumento del presupuesto para el proyecto a causa de dificultades técnicas: de 1.500 a casi 2.400 millones de dólares. Además, problemas con la división de la tributación entre Chile y Argentina así como otros impedimentos administrativos y legales retrasan un inicio que lleva más de siete años posponiéndose.

5. Análisis y discusión

5.1. Caracterización del esquema del conflicto

A partir del Análisis CLIP mencionado en la metodología, se clasificaron los actores sociales del conflicto de P-L en una serie de categorías atendiendo a su poder y a su legitimidad: Poderosos, Marginados, Vulnerables, etc. Y se observó después dónde se situaban dentro del conflicto.

¿Qué posición toman en el conflicto los actores más Poderosos? En general apoyan el proyecto porque perciben que saldrán beneficiados en caso de realizarse la mina. Estos beneficios se deben básicamente a ganancias de tipo económico. Ganancias directas, como las de la propia Barrick, o por fomentar determinadas políticas económicas, en el caso de las autoridades municipales y nacionales.

Dados los actuales sistemas de evaluación ambiental y de otorgamiento de permisos mineros en Chile, el poder de decisión sobre la realización de un proyecto recae totalmente en las administraciones, en este caso nacionales. Se impone un determinado sistema de toma de decisiones que legitima únicamente a políticos gubernamentales como aptos para estimar la pertinencia de una actividad. La participación pública queda en un paso simbólico, que puede modificar alguna característica del proyecto pero que



no es vinculante. Y dado que esta autoridad política se entrelaza constantemente con el recurso económico, las decisiones atienden a prioridades económicas privadas.

¿Qué posición toman los actores Marginados o Vulnerables? La mayoría de los grupos rurales, sobre todo los de tipo étnico-territorial, religioso o ambiental y los pequeños agricultores, ven el proyecto como un perjuicio para su medio y forma de vida. En la ciudad de Vallenar, la situación es algo diferente, el alto desempleo hace que la base social se posicione a favor de la mina.

El único actor local poderoso que en un momento dado reconoció sentirse perjudicado con el proyecto, es la Directiva de la Junta de Vigilancia; es decir los grandes y medianos agricultores. Sin embargo, una mejora en las características ambientales y una aportación económica de Barrick a la agrupación, entre otras causas que después se comentarán, hizo que cambiara su posición en junio del 2005. Esto alteró intensamente el panorama del conflicto.

Por tanto, en la primera etapa, tenemos la masa agrícola (grandes y pequeños agricultores) en contra de la minera y de las autoridades. La oposición a P-L era heterogénea a nivel de poder y aunque ya existía una defensa del medio ambiente en términos de valores (así como una defensa del desarrollo), podría entenderse esta etapa como un "conflicto de intereses" en el sentido más material propuesto por Folchi (2000). Según este autor, en Chile en concreto, muchas de las reivindicaciones de contenido ambiental son llevadas a cabo por grupos heterogéneos o económicamente bien posicionados. Además, estos conflictos dan lugar en muchas ocasiones a reivindicaciones que se alejan de lo que se entiende como defensa del medio en términos de valores. Lo que ocurre en muchos casos es "una ecologización del discurso" de un grupo que se enfrenta a una tensión ambiental. Por ello, él prefiere hablar de conflictos de intereses o conflictos de contenido ambiental más que de conflictos ambientales.

En la segunda etapa, sin embargo, el cambio de la Junta deja a una masa rural vulnerable

en contra de los intereses de todos los poderosos, ya sean agrícolas, mineros o autoridades políticas. El conflicto pasa de ser una lucha entre actividades productivas, cada una con un diferente impacto ambiental, a una lucha del poder económico y político contra las formas de vida más tradicionales. Pasa de ser "Agricultura vs. Minería" a "Poderosos contra Marginados rurales". Çoban (2004), en su análisis del movimiento de Bergama contra una mina de oro en Turquía, argumenta que muchos conflictos ambientales son la manifestación de dos coaliciones o simbiosis contrapuestas: la comunidad y el medio ambiente frente al estado y el capital. Este esquema encaja también con las interpretaciones de muchos conflictos ambientales de Martínez-Alier (2002), Muradian et al. (2003), Sabatini (1997) o Padilla (2000). En este caso, la reconciliación entre el capital local y el estado, es decir, entre la Junta y las autoridades, podría interpretarse como la materialización de esa simbiosis.

En otros conflictos mineros, la actuación de los grandes agricultores ha aumentado las oportunidades de la oposición. Un ejemplo de ello es Tambogrande en Perú, donde los medianos y grandes intereses agrícolas respaldaron el referéndum sobre la minería (cuyo resultado fue un rotundo no). Sin embargo, en palabras de la Junta del Huasco, su posición también ha sido esencial en la evolución del proyecto: su acercamiento a Barrick ha servido para cambiar las condiciones de seguridad de Pascua-Lama, "un proyecto imparable".

5.2. Aproximación a los intereses y valores defendidos

Así, podríamos interpretar este giro en el conflicto como un aumento de la división entre clases y hablar de ecologismo o "agriculturalismo" de los pobres. Sin embargo, y aunque el análisis estructural de poder y actividad productiva es muy relevante, la construcción de discursos y la fusión de valores locales y transnacionalizados que sucede durante el conflicto hace necesario matizar esa interpretación clasista. El porqué



del cambio de postura de la Directiva de la Junta podría argumentarse únicamente desde el principio de intereses materiales. Sin embargo, limitar el concepto de interés a valores económicos o materiales, es dejarnos toda una parte de la teoría de los movimientos sociales de lado.

Cuando hablamos de racionalidad de los actores sociales, nos referimos a que estos realizan un cálculo coste-beneficio a la hora de actuar o posicionarse en una situación concreta. Este cálculo puede ser el de cuánto ganaré si tomo esta opción o cuánto me puede costar movilizarme. En el inicio de la aplicación de este concepto en la teoría de la acción colectiva (Olson 1965, en Neveu 2002), la visión era básicamente economicista. En los setenta se introduce la idea de Movilización de Recursos y se amplía el espectro de costes y beneficios a cuestiones políticas y sociológicas (Oberschall 1973, en Neveu 2002). Para Kousis (1998), el actuar de una comunidad marginada ecológicamente pasa por disponer de estructuras de oportunidad económica, de oportunidad política, recursos organizativos y un marco ideológico relacionado. Y con todo esto, lo que se pretende decir, es que los actores sociales actúan en muchos casos por un beneficio material pero, en otras, por ideologías, redes sociales o maneras de ver el mundo.

Para el caso de P-L, no se ha pretendido profundizar en el porqué de la postura de cada uno de los actores sociales. Lo que se ha intentado ver es cuáles son los marcos interpretativos que se han ido construyendo a lo largo del conflicto y *cómo* estos han podido influir en el proceder de algunos agentes sociales. Estos marcos o visiones selectivas del mundo se construyen a partir de valores e ideas preexistentes en la comunidad y sobre la base de condiciones sociales y situaciones concretas. Por esto, nos ayudarán a comprender el posicionamiento de los grandes agricultores locales y del movimiento de oposición.

Los grandes agricultores locales: Una de las visiones que tiene un peso importante

dentro de este grupo es la desarrollista. La equiparación de desarrollo económico a bienestar, la capacidad de la gran empresa como su promotor, el positivismo tecnológico o la fidelidad a la legislación y la administración vigente son algunos de sus componentes. La contestación a un proyecto promovido por las autoridades como el futuro motor económico de la zona no entraba dentro de la lógica de este marco compartido (e impulsado) por la Directiva de la Junta. La nula fe en la capacidad de los movimientos sociales como herramienta política, así como el deseo de continuar dentro del estatus empresarial progresista, supusieron "incentivos selectivos" adicionales a los meramente materiales. La suma de todos estos incentivos (y posiblemente otros) supusieron el cambio de posición de los grandes agricultores huascoalinos.

Este proceso representa un ejemplo de cómo la simbiosis estado-capital de la que hablábamos se sostiene sobre la construcción de un determinado marco interpretativo de la realidad. Pero un ejemplo también de cómo este marco favorece y potencia la simbiosis.

El movimiento anti-minero: Según Martínez-Alier & Guha (1997), el "ecologismo de los pobres" nace de la defensa de una forma de vida muy dependiente del medio, es decir, la protesta surge del fuerte apego y valorización de esa comunidad hacia su fuente de subsistencia. Esta defensa puede tener un origen materialista (la defensa de los bosques o del agua) pero usa lenguajes y se sostiene en valores espirituales.

Sin embargo, numerosos analistas chilenos (Sabatini & Sepúlveda 1997; Padilla 2000) hablan más bien de la influencia de un mayor interés mundial en el medio ambiente como el desencadenante de los movimientos ambientalistas en Chile. Según Sabatini (1997), la creciente incertidumbre manufacturada proveniente de la inseguridad por el deterioro ambiental, la flexibilización de los mercados y otros procesos globales (Giddens 1994, en Sabatini 1997), el debilitamiento universal de las ideologías



políticas, el debilitamiento del estado y el surgimiento de nuevos valores se sitúan cómo claves para el despertar de la conciencia ambiental latinoamericana.

En el caso de P-L, podemos decir que se da a la vez una defensa de la subsistencia y de los valores locales, y al mismo tiempo un contagio de la preocupación ambiental mundial. Por un lado, la presencia de pequeños agricultores, reivindicaciones indígenas y concepciones de la naturaleza como sagrada, cumplirían con las condiciones del ecologismo de los pobres. Sin embargo, el reciente crecimiento de la producción agrícola y la proletarianización de muchos pequeños agricultores reducen la capacidad explicativa de esta teoría para la comuna de Alto del Carmen. La hipótesis de “broadening base” (Jones & Dunlap 1992; Dunlap 2008) puede quizás ayudar a esta comprensión. Según Dunlap, a medida que los problemas ambientales se hacen más obvios y omnipresentes, la preocupación sobre ellos se extiende a cualquier sector de la población, independientemente de sus características socio-ambientales. Podría ser que la magnitud del proyecto, junto con el contacto con ONGs e individuos de Santiago y otros lugares, haya extendido estos valores supuestamente postmaterialistas a personas que no tienen sus necesidades materiales del todo resueltas. En efecto hay un poco de cada cosa: defensa del agua y de la agricultura como medio de subsistencia y una percepción de los riesgos más propia de sociedades postmaterialistas. La alianza entre ecologismo popular y ambientalismo global puede verse reflejada en este comentario de un agricultor local: “Hacer desaparecer glaciares no es problema de este valle ni de Chile, es un problema a nivel mundial”.

Además y como apunta Sabatini (1997), los CAL (Conflictos Ambientales Locales) cuentan con un fuerte potencial político de transformación social dado que son, a su vez, conflictos distributivos y territoriales. Este es un claro ejemplo de ello. En los dos marcos interpretativos construidos en torno a la oposición al proyecto, existen reivindicaciones distributivas y territoriales. En

el marco indigenista, la mención a los derechos territoriales de los Diaguitas es continua. En el tradicionalista, las críticas a la privatización, a las políticas de inversión extranjera y a la insostenibilidad laboral de la minería también. Por tanto, vemos como este no es un caso puro con un único nivel de abstracción: se entrelazan reivindicaciones materiales, la defensa ancestral de un modo de vida agrícola y discursos ambientalistas. La oposición tiene reivindicaciones heterogéneas y los marcos interpretativos construidos entorno a ella (indigenista y tradicionalista) son la cristalización de esa complejidad.

Figura 3. Mural en Alto del Carmen, diciembre del 2006



Fuente: Urkidi 2006

5.3. Internacionalización del conflicto y “empoderamiento”

La influencia del ambientalismo global no es la única relación entre el movimiento anti Pascua-Lama y la escala mundial. La internacionalización de sus reivindicaciones, la paulatina conexión de la oposición local con organizaciones y particulares en Santiago, con otras comunidades en conflictos ambientales y con redes de apoyo internacionales ha conformado uno de sus recursos más poderosos. Arturo Escobar (2000) denomina a este proceso “glocalización” alternativa:

“Redes tales como las de los indígenas, los ambientalistas, las ONG y otros movimientos sociales se están haciendo más numerosas y de mayor influencia a niveles locales, nacionales y transnacionales. Muchas de



estas redes pueden ser vistas como productoras de identidades basadas-en-el-lugar y a la vez transnacionalizadas. También se pueden considerar como productoras de glocalidades alternativas a aquellas del capital, los medios y la cultura global. Todas las glocalidades son tanto locales como globales, pero no son globales y locales de la misma manera (Dirlik 1997)".

¿Cómo se articula, entonces, en lo local y en lo global, el movimiento opositor a Pascua-Lama? Para Tarrow (2005), es el internacionalismo, más allá de la globalización, lo que crea las estructuras tanto para crear coaliciones transnacionales como para las propias resistencias a la globalización. Este podría resumirse como un incremento en las relaciones horizontales (entre estados, agencias gubernamentales y actores no estatales) así como en las verticales (entre los niveles internacionales, nacionales y subnacionales). Este internacionalismo constituye una importante oportunidad política para un movimiento, como el del Valle del Huasco, que padece la denominada marginación ecológica rural.

Según Tarrow, existen una serie de pasos que enlazan el activismo doméstico con el sistema internacional. El primero de ellos sería enmarcar globalmente el conflicto. A pesar de que la implantación de la mina en el Valle del Huasco responde no sólo a la geología minera local sino al mercado global del oro, la oposición nace de una situación concreta y local como es la proliferación minera en su territorio. Sin embargo, a medida que van creándose esas redes supralocales, va creciendo la conciencia de lo extensivo y estructural de este tipo de problemáticas. El discurso localista y tradicionalista se va enriqueciendo con ideas de organizaciones nacionales o transnacionales: la superfluidad de los usos del oro como argumento contra su extracción, el carácter mundial de las guerras del agua o la valorización global de los glaciares amenazados por el cambio climático. A su vez, las ideas clave que desde la oposición se difunden al exterior se van articulando en unos determinados ejes. Si en Esquel el argumento preponderante son los riesgos del

cianuro, si en Sipacapa es la defensa de un territorio indígena, en Alto del Carmen domina la defensa del agua y de los glaciares (aunque, por supuesto, el cianuro se menciona en muchas protestas y la población indígena local también tiene un papel). La presente investigación se situó en la parte chilena del conflicto, vertiente en la que no se utilizará ni transportará cianuro (se hará en Argentina). Por ello, por la dependencia de la comunidad hacia su frágil sistema hídrico y por el impacto mediático de la destrucción glaciaria, el eje reivindicativo no lo constituye el cianuro sino los glaciares.

Como siguiente paso, tendríamos la formación de redes de colaboración más o menos estables. En este caso, se cuenta con el surgimiento de grupos monográficos en contra de Pascua-Lama en Santiago, Valparaíso o Canadá, el apoyo de ONGs nacionales como el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) o la creación de coaliciones horizontales permanentes con otras comunidades en conflicto (la Red de Justicia Ambiental de Chile o las colaboraciones continuas con otras comunidades latinoamericanas afectadas por Barrick). La experiencia en otros casos muestra que este proceso es el que se introducen organizaciones de mayor escala espacial (como Oxfam América en Tambogrande) fomenta la legitimación de determinadas prácticas democratizadoras como la llamada a un referéndum (obligatorio según el convenio 169 de la OIT en casos de comunidades indígenas). Un salto vertical mayor supondría concretar vínculos, al menos informales, con organismos panamericanos o internacionales de presión o con gobiernos extranjeros (como el de Canadá) que pudieran incidir directamente en las decisiones de la empresa o del gobierno chileno. La cultura política del país de origen de la empresa es decisiva a la hora de intervenir en negocios transnacionales de este tipo.

La creación de estas redes favorece, además, la difusión del conflicto y esta, a su vez, una mayor atracción de periodistas e investigadores. En el caso de P-L, la gran



difusión, sobre todo vía Internet, ha provocado la proliferación de visitas de documentalistas y estudiosos de todas partes del mundo, convirtiéndose estos en partícipes del conflicto y aumentando así, no solo el poder social de la oposición, sino también la reflexividad del movimiento. Las frecuentes entrevistas y grabaciones hacen que los actores sociales se replanteen más continuamente sus objetivos y discursos. Por otro lado, el contacto con ONGs y otras comunidades impulsa y fortalece la adquisición de conocimiento técnico, ecológico, social y político. El aprendizaje social es proceso y resultado de la creación de comunidades más conscientes y por tanto más poderosas. Este mayor acceso a la información, así como a los medios de comunicación y difusión, supone un "empoderamiento" de la comunidad.

Sin embargo, a lo largo de todo el conflicto, el poder de decisión sobre P-L se ha mantenido en manos gubernamentales. El incremento de las oportunidades políticas de la oposición propiciadas por el internacionalismo no se ha concretado aún en un acceso comunitario real a la toma de decisiones. Según algunos autores (Haarstad & Floy sand 2007), el éxito depende en gran medida de cómo se movilicen los recursos discursivos y de cómo las ONGs nacionales, como canalizadoras del conflicto, ayuden en la rearticulación de las reivindicaciones locales para legitimarlas en escalas más amplias. El OLCA podría representar, en este caso, ese canal.

Aunque no se haya logrado un acceso popular a la toma de decisiones sobre P-L, el activismo ha generado, como comentábamos, una mayor cultura política y un mayor acceso a la información y a los medios de comunicación, incrementándose así el poder local en el Valle del Huasco.

6. Conclusión

Los conflictos de tan larga duración como el de Pascua-Lama, cuentan con una serie de ciclos de intensidad. La mayor movilización de la oposición ocurrió antes de la aprobación del segundo EIA (pintada de murales,

manifestación de 2500 personas en Vallenar, charlas y difusión), mientras que uno de los momentos de menor actividad opositora fue justo después de esa aprobación. La resignación procede en cierto grado del marco desarrollista que limita cognitivamente la capacidad de acción autónoma y popular. La grandeza de las transnacionales, lo imparables del progreso o la inutilidad de la movilización social son argumentos que bombardeados a la comunidad favorecen o imponen el conformismo. Otras cuestiones que los propios opositores a la mina mencionan como fuente de resignación serían: las secuelas de la conquista, las secuelas de la dictadura, el escaso nivel educativo, el aislamiento o el carácter rural introvertido. Y es que el ejercicio del poder puede ser visible y obvio, con una imposición, con una aprobación. Pero también sutil y cotidiano, deslegitimando determinados valores o menospreciando implícitamente la forma de vida agrícola.

Por ello, investigar conflictos de esta índole lleva a valorizar la labor política de los movimientos populares. Es necesario profundizar en el estudio de estos proliferantes conflictos ecológicos para visibilizarlos y comprenderlos mejor. Comprender su carácter estructural. Entender los valores e intereses que se despliegan en su evolución y que describen a sociedades generalmente marginadas. Analizar las estrategias de las comunidades y poder determinar sus limitaciones y logros. Estos análisis constituyen una herramienta de reflexión para las comunidades que viven estas situaciones y pueden ayudar a descubrir nuevas vías de empoderamiento local. Pascua-Lama es considerado el conflicto ambiental chileno más importante de los últimos años. Por ello, las conclusiones de su estudio pueden suponer un relevante ejemplo de las claves políticas de los actuales movimientos anti-mineros latinoamericanos.

REFERENCIAS

Çoban, A. 2004. Community-based Ecological Resistance: the Bergama Movement in Turkey. *Environmental Politics* Vol. 13, No. 2: 438-460.



- Chevalier, J. M. 2006. SAS2 1.0: Análisis Social CLIP. Sistemas de Análisis Social² 1.0. Disponible en: <http://www-sas-pm.com/>
- Dirlik, A. 1997. The Post Colonial Aura: Third World Criticism in the Age of Global Capitalism. Colorado: Westview Press.
- Dunlap, R. 2008. The Globalization of Environmental Concern and the Limits of the Post-Materialist Values Explanation: Evidence from Four Multi-National Surveys. *Sociological Quarterly* Vol. 49 (forthcoming).
- Escobar, A. 2000. El lugar de la naturaleza y la naturaleza del lugar: ¿globalización o postdesarrollo?. En: Lander, E. (ed). La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas Latinoamericanas. Buenos Aires: CLACSO.
- Fraser Institute. 2003. Annual Survey of Mining Companies 2002/2003. Vancouver: Fraser Institute. Disponible en: www.fraserinstitute.org
- Folchi, M. 2001. Conflictos de contenido ambiental y ecologismo de los pobres: no siempre pobres, no siempre ecologistas. *Ecología Política* Vol. 22: 79-101.
- Gabarrón, L. R. & L. Hernández. 1994. Investigación Participativa. Cuadernos Metodológicos. Madrid: CIS.
- Giddens, A. 1994. Beyond Left and Right: the Future of Radical Politics. Scandford University Press. Tomado de: Sabatini, F. 1997. Chile: conflictos ambientales locales y profundización democrática. *Ecología Política* Vol. 13: 51-70.
- Guha R. & J. Martinez-Alier. 1997. Varieties of environmentalism. *Essays North and South*. London: Earthscan.
- Haarstad, H. & A. Floysand. 2007. Globalization and the power of rescaled narratives: A case of opposition to mining in Tambogrande, Perú. *Political Geography* Vol. 26: 289-308.
- Jones, R. & R. Dunlap. 1992. The social bases of environmental concern: Have they changed over time? *Rural Sociology* Vol. 57, No. 1: 28-47.
- Kousis, M. 1998. Ecological Marginalization in Rural Areas. Actors, Impacts, Responses. *Sociologia Rurales*, Vol. 38, No. 1: 86-108.
- Luna Quevedo, D., Padilla, C. & J. Alcayaga Olivares. 2004. El exilio del cóndor: Hegemonía transnacional en la frontera: El tratado minero entre Argentina y Chile. Santiago de Chile: OLCA.
- Martínez-Alier, J. 2002. The environmentalism of the poor: ecological conflicts and valuation. Cheltenham: Edward Elgar.
- Muradian, R., Martinez Alier, J. & H. Correa. 2003. International Capital Versus Local Population: The Environmental Conflict of the Tambogrande Mining Project, Peru. *Society and Natural Resources* Vol. 16, No. 9: 775-792.
- McAdam, D., McCarthy, J. & M. Zald. 1999. Movimientos sociales: perspectivas comparadas. Madrid: Ediciones Istmo.
- Neveu, É. 2002. Sociología de los Movimientos Sociales. Barcelona: Editorial Hacer.
- Oberschall, A. 1973. Social Conflict and Social Movements. Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall. Tomado de: Neveu, É. 2002. Sociología de los Movimientos Sociales. Barcelona: Editorial Hacer.
- Olson, M. 1965. The Logic of Collective Action. Cambridge, Mass: Harvard University Press. Tomado de: Neveu, É. 2002. Sociología de los Movimientos Sociales. Barcelona: Editorial Hacer.
- Padilla, C. 2000. El pecado de la participación ciudadana. Conflictos ambientales en Chile. Santiago de Chile: OLCA.
- Pegg, S. 2006. Mining and poverty reduction: Transforming rhetoric into reality. *Journal of Cleaner Production* Vol. 14, No. 3-4: 376-387.
- Ross, M. L. 2001. Does oil hinder democracy?. *World Politics*, Vol. 53, No. 3: 325-361. Tomado de: Pegg, S. 2006. Mining and poverty reduction: Transforming rhetoric into reality. *Journal of Cleaner Production* Vol. 14, No. 3-4: 376-387.
- Sabatini, F. 1997. Chile: conflictos ambientales locales y profundización democrática. *Ecología Política* Vol. 13: 51-70.
- Sabatini, F. & C. Sepúlveda. (eds). 1997. Conflictos ambientales. Entre la globalización y la sociedad civil. Santiago de Chile: CIPMA.
- Tarrow, S. 2005. The New Transnacional Activism. New York: Cambridge University Press.
- Weber-Fahr, M. 2002. Treasure or trouble? Mining in developing countries. Washington D. C.: World Bank and International Finance Corporation.